



E

Editorial

Fondos regionales y sus resultados

La Gobernación de Los Lagos ha advertido que la entrega de recursos estará supeditada a la obtención de un impacto verificable.

A la reciente creación de la Unidad de Cobranza en el Gobierno Regional de Los Lagos, entidad administrativa destinada a fiscalizar, ordenar y gestionar el estado de millonarios recursos que mantienen rendiciones pendientes, el gobernador Alejandro Santana sumó ahora un nuevo anuncio durante su cuenta pública de hace algunos días: se condicionará el financiamiento de los futuros proyectos a la obtención de resultados comprobables.

Esta variable operativa se inscribe directamente en el marco del recorte fiscal impulsado a nivel central desde el Ministerio de Hacienda, una política de contención del gasto que sin duda terminará impactando también en la disponibilidad de las finanzas regionales durante los próximos meses. El resguardo de cada peso se vuelve una obligación legal.

Sin embargo, la actual restricción presupuestaria nacional no es el único factor desde donde se puede explicar esta determinación institucional. Es inevitable recordar el triste papel que tuvo esta región en la cautela de los dineros públicos durante la pasada administración. En el contexto de las indagatorias del denominado Caso Convenios, surgió en esa época el antecedente de la entrega de \$1.200 millones desde el Gore a la Corporación Kimün, los que no se utilizaron en el prometido saneamiento de títulos de dominio para familias locales y que a la fecha nadie sabe con certeza dónde terminaron depositados, en un escándalo financiero que mantiene a seis personas con un juicio oral ad portas de su inicio.

La fe pública quedó profundamente dañada tras estos episodios de falta de probidad. Para evitar repetir este nivel de defraudación al Fisco, el nuevo escenario administrativo exigirá entonces que todos los proyectos que busquen patrocinio estatal estén suficientemente justificados desde su origen, que tengan resultados técnicos y sociales plenamente comprobables, y que sean sometidos a periódicas revisiones de cuentas para garantizar su avance.

La época en que se financiaban iniciativas sin un control estricto debe quedar en el pasado. El desarrollo regional requiere inversiones sólidas, eficientes y transparentes para proteger íntegramente el patrimonio fiscal y asegurar que cada peso llegue a quienes realmente lo necesitan.